

Entrevista

En conversación de Palabra de Iquiqueño por Longino TV

Victoria Cardemil: "Tarapacá siempre ha sido tierra de migrantes, pero hoy necesitamos mirar la movilidad humana desde la ciencia y no desde el miedo"

En una región donde la frontera no es solo una línea geográfica, sino una experiencia cotidiana, social y cultural, la mirada de Victoria Cardemil adquiere especial relevancia. Iquiqueña, socióloga, magister en Educación Superior y actualmente vinculada a estudios transfronterizos, ha centrado su interés académico y humano en uno de los fenómenos más complejos del presente: el desplazamiento humano forzado.

Su investigación se enfoca particularmente en las experiencias migratorias de personas que habitan en campamentos de la comuna de Alto Hospicio, especialmente en el sector de Alto Molle, donde conviven realidades marcadas por la precariedad, la falta de acceso a servicios básicos, la informalidad territorial y la presencia de familias que han llegado a Chile no siempre por decisión libre, sino muchas veces empujadas por crisis políticas, económicas, sociales, sanitarias o climáticas.

Desde esa perspectiva, Cardemil plantea una discusión que incomoda, pero que resulta urgente para una región como Tarapacá. A su juicio, la migración no puede ser abordada únicamente desde la seguridad ni desde la criminalización, sino también desde la memoria, los derechos humanos, la ciencia social y la responsabilidad de construir políticas públicas capaces de anticiparse a las crisis.

En esta conversación, la investigadora abre una reflexión profunda sobre el valor de la ciencia, el rol de la política, el racismo estructural, la infancia en contextos de vulnerabilidad y la necesidad de comprender que nadie está completamente libre de convertirse, algún día, en una persona desplazada.

Victoria, usted es iquiqueña, socióloga, magister en Educación Superior y hoy se encuentra vinculada a un doctorado en Estudios Transfronterizos. ¿Cómo se llega a este campo de investigación y qué significa estudiar la frontera desde esa mirada?

Los estudios transfronterizos tienen que ver con cómo se construyen las relaciones internacionales, pero no solamente desde las instituciones o los acuerdos entre Estados. También existe una línea muy importante que mira las experiencias migratorias, y ahí es donde a mí me interesa profundizar.

Mi área de investigación está centrada en el desplazamiento humano forzado. Me interesa conocer y dar a conocer las memorias de las personas que han tenido que desplazarse por motivos que muchas veces no dependen de ellas. Hay quienes se mueven por violencia, por persecución política, por crisis económica, por fenómenos climáticos o por falta de condiciones mínimas para vivir.

En ese sentido, la frontera no es solo un lugar de control. La frontera también es un espacio humano, donde se cruzan historias, dolores, esperanzas y proyectos de vida. Por eso, cuando hablamos de Tarapacá, tenemos que entender que esta región ha sido históricamente un territorio de movilidad y de encuentro.

Usted ha concentrado parte de su trabajo en el sector de Alto Molle, en la comuna de Alto

La socióloga iquiqueña y postulante a doctora en Estudios Transfronterizos aborda el desplazamiento humano forzado, la realidad de los campamentos en Alto Hospicio, la infancia migrante, el rol del Estado y la urgencia de comprender la frontera norte como un espacio humano, histórico y cultural, más allá del conflicto político.

Hospicio. ¿Qué realidades ha encontrado allí?

En Alto Molle existen distintas realidades. Está, por ejemplo, La Mula, que actualmente es considerada una toma, y está también el campamento La Pampa II, que tiene otra figura porque al ser reconocido como campamento permite cierto nivel de intervención por parte del Estado.

Esa diferencia es importante, porque no es lo mismo estar en una toma que en un campamento reconocido. El reconocimiento estatal abre posibilidades de intervención, de diagnóstico, de acompañamiento y de políticas públicas. En cambio, cuando un asentamiento permanece en la categoría de toma, muchas familias quedan en una situación aún más compleja e invisible.

Mi interés está puesto en mirar esas experiencias desde la memoria de las personas. No se trata solo de decir que viven en condiciones precarias, sino de entender cómo llegaron ahí, qué han perdido, qué han tenido que reconstruir y qué tipo de futuro imaginan para sus hijos.

Cuando hablamos de desplazamiento humano forzado, muchas veces se asocia el concepto a determinadas nacionalidades. ¿Por qué usted insiste en que esa mirada es insuficiente?

Porque ninguna nacionalidad está libre del desplazamiento humano forzado. A veces se tiende a pensar que las personas desplazadas son solamente venezolanas, cubanas o colombianas, pero no es así. Cualquiera persona, de cualquier país, puede verse obligada a salir de su territorio si existen condiciones que ponen en riesgo su vida.

Mientras existan guerras, crisis políticas, persecuciones, violencia, pobreza extrema o fenómenos climáticos cada vez más intensos, va a existir desplazamiento humano forzado. Y eso incluye también a los chilenos. Nadie puede asegurar que el día de mañana no debamos buscar refugio en otro país por un terremoto, un tsunami, una crisis climática o una situación política determinada.

Por eso me parece tan importante hablar de este tema no desde el prejuicio, sino desde la prevención. Necesitamos pensar qué tipo de mecanismos humanitarios queremos construir, porque si hoy no defendemos la protección internacional para otros, mañana podríamos encontrarnos sin protección cuando la necesitemos nosotros.

En esa línea, usted ha planteado que las crisis climáticas también deben incorporarse al debate migratorio. ¿Por qué?

Porque el desplazamiento humano forzado ya no puede entenderse solamente desde las crisis políticas o económicas. El cambio climático está provocando y va a seguir provocando desplazamientos masivos. Sequías, inundaciones, pérdida de territorios habitables, escasez de agua y fenómenos extremos van a obligar a muchas personas a salir de sus lugares de origen.

Hay proyecciones muy dramáticas a nivel internacional sobre la cantidad de personas que podrían desplazarse por razones climáticas en las próximas décadas. También se habla de escenarios donde una parte importante de la población mundial tendrá dificultades para acceder a agua potable.

Entonces, si seguimos pensando la migración solo desde el control policial, llegamos tarde. La movilidad humana es un fenómeno estructural del presente y del futuro. Lo responsable es construir políticas públicas con anticipación, con evidencia y con humanidad.

Usted también vincula el desplazamiento humano con la salud. ¿De qué manera se conecta una crisis sanitaria con la necesidad de protección internacional?

La vida de una persona puede estar en riesgo por muchas razones. Puede estar en riesgo por persecución política, por violencia, por guerra, pero también por no tener acceso a salud. Si una persona no puede acceder a tratamiento, si vive una crisis sanitaria o si su país no puede garantizar condiciones mínimas para sobrevivir, también estamos frente a una situación que debe ser observada desde una perspectiva humanitaria.

En Chile existe la Ley 20.430, que aborda la situación de personas solicitantes de refugio y refugiadas. Esta ley nace en el marco del Estatuto de Refugiado de 1951, que inicialmente estaba muy asociado a la persecución política, religiosa o ideológica. Pero luego, con la Declaración de Cartagena de 1984, la definición se amplía hacia situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.

El problema es que en Chile esta protección funciona de manera muy limitada. Hay una baja aprobación de solicitudes de refugio y muchas personas no logran acceder realmente a la protección internacional.

Usted ha sido crítica respecto de la baja aprobación de solicitudes de refugio en Chile. ¿Qué revela eso sobre el sistema?

Revela que el sistema no está funcionando de manera adecuada. Durante los años de mayor crisis migratoria, cuando veíamos ingresos diarios por Colchane y campamentos improvisados en distintos puntos de Iquique, miles de personas solicitaban refugio. Sin embargo, la cantidad de aprobaciones fue mínima.

Eso demuestra que hay una brecha enorme entre la existencia formal de una ley y su aplicación real. Una cosa es que exista una norma y otra muy distinta es que las personas puedan acceder efectivamente a ella, especialmente en frontera, que es donde muchas veces deberían iniciarse estos procesos.

Por eso sostengo que no basta con tener una ley de refugio si no funciona. Se requieren mecanismos reales, administrativos, humanos e institucionales que permitan proteger a quienes llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En otros países se han creado alternativas, como visados humanitarios. ¿Chile debería avanzar hacia una figura de ese tipo?

Sí, creo que Chile debería discutir seriamente un visado humanitario. Hay experiencias internacionales interesantes. Brasil, por ejemplo, reconoció la situación de muchas personas venezolanas desde una mirada de crisis política y social, y además generó mecanismos que les permitieran trabajar.

El visado humanitario no entrega necesariamente todos los derechos de una persona nacionalizada o reconocida como refugiada, pero sí permite algo básico: trabajar, regularizar una situación mínima y salir de la completa irregularidad.

Cuando una persona queda en situación irregular, sin documentos, sin posibilidad de trabajar formalmente, sin acceso a una cuenta bancaria o a condiciones básicas, se vuelve mucho más vulnerable. Y esa vulnerabilidad puede ser aprovechada por redes de crimen organizado, por explotación laboral o por dinámicas de abuso.

Victoria, tu planteas que la irregularidad también puede ser un factor de riesgo para la seguridad. ¿Cómo se relacionan ambos fenómenos?

Cuando una persona queda fuera del sistema, no desaparece. Sigue viviendo en la ciudad, sigue necesitando comer, trabajar, cuidar a sus hijos y sobrevivir. Pero al no tener documentos ni acceso formal al trabajo, se expone a circuitos de precariedad y explotación.



Eso puede facilitar que el crimen organizado capte a personas vulnerables mediante amenazas o necesidad económica. En la región hemos conocido casos de mujeres utilizadas como burreras, personas que terminan imputadas por delitos, pero que muchas veces llegaron a esa situación bajo presión, amenaza o extrema precariedad.

Por eso, una política migratoria inteligente también es una política de seguridad. Regularizar, identificar, permitir el trabajo y reducir la marginalidad no es ingenuidad; es prevención. La exclusión, en cambio, produce más pobreza, más informalidad y más riesgo para todos.

En Chile existe una discusión muy fuerte sobre seguridad y migración. ¿Cree que se ha instalado una mirada demasiado simplificada?

Sí, absolutamente. El problema es que muchas veces se construye un discurso donde el migrante irregular aparece como responsable de todos los males. Es una figura fácil de culpar porque no tiene poder, no tiene recursos, muchas veces no tiene documentos y no puede defenderse.

Ahí hay una estrategia muy peligrosa, porque se instala una especie de chivo expiatorio. En lugar de mirar problemas estructurales como la pobreza, la falta de vivienda, la desigualdad, la ausencia del Estado o la expansión del crimen organizado, se reduce todo a la presencia de personas migrantes.

Eso no quiere decir negar los problemas de seguridad. La seguridad es un tema real y urgente. Pero no se puede abordar con prejuicios ni con soluciones que no estén respaldadas por evidencia. Necesitamos políticas basadas en ciencia, no en miedo.

Usted ha hablado de racismo estructural. ¿Cómo se expresa en esta discusión?

Se expresa en la forma en que algunas nacionalidades son tratadas, representadas y estigmatizadas. Chile históricamente recibió migrantes europeos, croatas, yugoslavos, alemanes, españoles, y muchas veces esas migraciones fueron valoradas positivamente. En cambio, cuando se trata de migraciones latinoamericanas recientes, especialmente desde países en crisis, aparece una mirada mucho más dura.

Eso tiene que ver con un racismo estructural que está presente en el lenguaje, en los medios de comunicación, en ciertos discursos políticos y también en la forma en que como sociedad imaginamos quién merece ser recibido y quién no.

Tarapacá, sin embargo, siempre ha sido una tierra de migrantes. Antes, durante y después de los grandes procesos históricos de la región, este territorio ha estado marcado por la movilidad humana. Por eso es tan importante tener memoria histórica. La identidad tarapaqueña se ha construido desde el cruce, desde la frontera, desde la diversidad.

Usted mencionaba que Tarapacá ha sido históricamente una tierra migrante. ¿Por qué esa acepción es importante hoy?

Porque permite mirar el presente con mayor profundidad. Tarapacá no se entiende sin la migración. Este territorio ha sido habitado, recorrido y transformado por distintos pueblos, comunidades y nacionalidades a lo largo del tiempo.

Incluso antes de la Guerra del Pacífico, este espacio tenía una composición humana diversa. La historia salitrera, portuaria, comercial y fronteriza de Iquique está llena de movilidad. Por eso resulta contradictorio que hoy se quiera presentar la migración como algo ajeno a nuestra identidad regional.

Recordar esa historia no significa negar los desafíos actuales. Significa comprender que la movilidad humana no es una anomalía, sino parte de la historia de la región. La pregunta es cómo la gestionamos de manera justa, ordenada, humana y responsable.

En su trabajo aparece con fuerza la realidad de los campamentos. ¿Qué le ha impactado más al recorrer esos territorios?

Lo que más impacta es la presencia de niños y niñas viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad. Hay familias sin acceso regular al agua, colgadas a la electricidad, expuestas a la inseguridad, al aislamiento y a una precariedad constante.

En algunos sectores de La Mula, por ejemplo, las personas deben caminar bastante para llegar a la carretera, no hay locomoción adecuada y muchas veces los niños quedan lejos de los establecimientos educacionales. Las familias, en su mayoría encabezadas por madres que deben trabajar, enfrentan prioridades muy duras: conseguir comida, cuidar a los hijos, buscar ingresos, resolver el día a día.

Recuerdo el caso de una niña en un taller, cuando hablábamos de cuidado y de salud. Me mostró sus dientes y tenía una situación dental muy grave. Eso refleja cómo la pobreza afecta directamente la salud, la infancia y el futuro. No es una estadística fría; son vidas concretas.

¿Qué ocurre con la infancia en estos contextos de

desplazamiento y campamento?

La infancia queda profundamente expuesta. Cuando un niño crece sin acceso a servicios básicos, en un contexto de inseguridad, con dificultades para llegar al colegio, con mala alimentación o sin atención de salud, su desarrollo se ve afectado.

A veces se habla de los campamentos como si fueran un problema urbano o habitacional, pero allí hay niños creciendo. Y esos niños no pueden esperar. Si no intervenimos a tiempo, las consecuencias se proyectan durante toda la vida: en la salud mental, en el aprendizaje, en el desarrollo emocional y en las oportunidades futuras.

Por eso insisto en que la discusión debe salir del odio y del prejuicio. No podemos normalizar que niños y niñas vivan en condiciones indignas solo porque sus familias son migrantes o porque están en situación irregular. La infancia debe estar por encima de cualquier cálculo político.

Desde su perspectiva, ¿la seguridad se resuelve solamente con más policías en la calle?

No. La presencia policial puede ser necesaria en determinados contextos, pero la seguridad no se construye solamente con policías. También se construye con reinserción social, con educación, con acceso a derechos, con empleo, con vivienda, con salud mental y con un piso mínimo de dignidad.

Si una sociedad genera exclusión permanente, esa exclusión vuelve como inseguridad. No se trata de justificar delitos, sino de entender que hay condiciones estructurales que facilitan ciertos fenómenos. La pobreza, la marginalidad y la falta de oportunidades generan riesgos que después afectan a toda la sociedad.

Nadie vive en una isla. El futuro de una persona depende también de que a las demás les vaya bien. Si tenemos territorios completos abandonados, sin servicios, sin oportunidades y bajo amenaza de violencia, tarde o temprano eso impacta en la ciudad completa.

Usted hace un llamado a mirar estos problemas desde la ciencia. ¿Por qué considera tan relevante ese punto?

Porque muchas decisiones públicas se toman desde el prejuicio, desde la urgencia electoral o desde discursos que suenan bien, pero que no necesariamente tienen evidencia detrás. La ciencia, en cambio, tiene métodos para observar, preguntar, contrastar, investigar y proponer.

Las ciencias sociales cuentan con herramientas como entrevistas, encuestas, observación participante, análisis documental y marcos teóricos que permiten comprender fenómenos complejos. No se trata de opinar por opinar, sino de generar conocimiento para orientar políticas públicas.

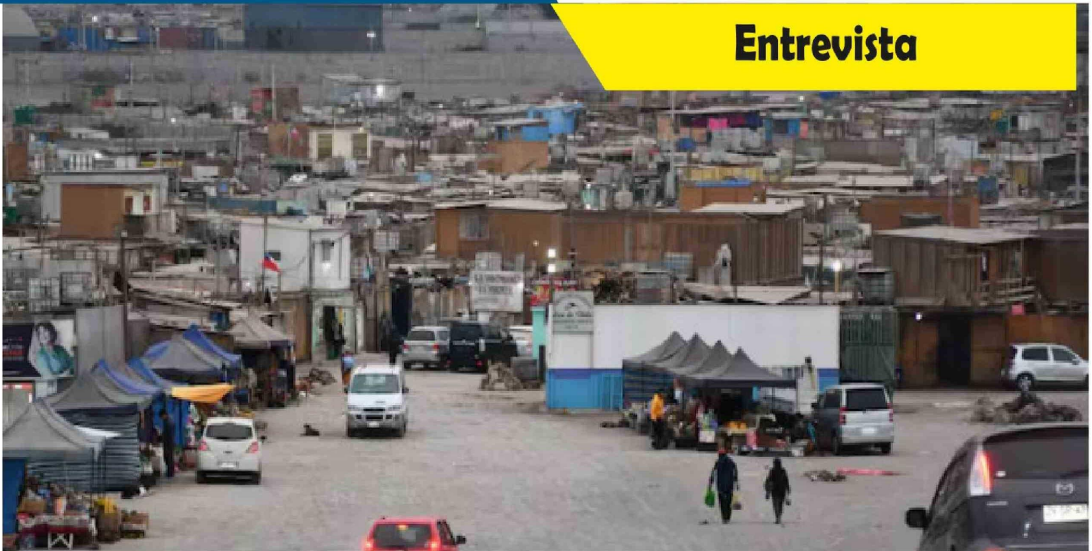
La ciencia nos ha permitido aumentar la esperanza de vida, enfrentar enfermedades, crear tecnología y mejorar condiciones materiales. Pero las ciencias sociales también son fundamentales, porque ayudan a entender cuándo se rompe el contrato social, por qué surgen las crisis, cómo se produce la exclusión y qué políticas podrían evitar daños mayores.

En esa línea, usted ha cuestionado la baja inversión en ciencia y el desvalor que a veces se le atribuye al conocimiento. ¿Qué riesgos ve en esa mirada?

El riesgo es confundir precio con valor. A veces se dice que invertir en investigación es gastar dinero en libros o informes que quedarán guardados en una biblioteca. Pero el valor de la ciencia no se mide solamente en el costo inmediato, sino en su capacidad de mejorar la vida de las personas.

Cuando no escuchamos a la ciencia, terminamos reaccionando tarde. Esperamos que haya una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis migratoria o una crisis de seguridad para recién preguntar qué está pasando. Pero el conocimiento debe ser permanente, preventivo y parte de la toma de decisiones.

En Chile invertimos poco en ciencia y eso es un



Entrevista

problema. Si queremos resolver fenómenos complejos, necesitamos investigación, datos, pensamiento crítico y políticas públicas basadas en evidencia.

Usted estudió en Iquique. ¿Qué lugar ocupa su propia historia local en esta vocación investigativa?

Yo estudié en el Colegio Hispano Italiano y luego en el Liceo Bernardo O'Higgins. Soy iquiqueña y creo que eso marca mucho mi forma de mirar la región. Tarapacá no es una idea abstracta para mí; es mi territorio, mi ciudad, mi historia.

Mi magister lo hice en la Universidad de Viña del Mar, en formato híbrido, en parte durante la pandemia. Mi investigación estuvo relacionada con historias de vida de docentes solicitantes de refugio y refugiados en la Región de Tarapacá. Fue un estudio de caso, no generalizable, pero muy importante para conocer memorias de personas que han sobrevivido a muchas dificultades.

Esa experiencia me confirmó que hay historias que deben ser escuchadas. La academia no puede estar separada de la vida real. Investigar también es abrir espacios para que otras voces puedan ser reconocidas.

Usted habla mucho de memoria. ¿Por qué la memoria es tan importante en el fenómeno migratorio?

Porque la memoria permite humanizar lo que muchas veces se reduce a cifras. Cuando hablamos de migración, se suele hablar de números, de ingresos, de controles, de expulsiones. Pero detrás de cada número hay una historia.

Las personas desplazadas tienen memoria de lo que dejaron, de lo que perdieron, de los caminos que recorrieron, de los peligros que enfrentaron y de lo que esperan reconstruir. Si no escuchamos esas memorias, solo vemos una parte del fenómeno.

Además, Chile también tiene memoria de desplazamiento. Después del 11 de septiembre de 1973, muchos chilenos tuvieron que salir al exilio y buscar refugio en otros países. Eso debería ayudarnos a comprender mejor lo que significa abandonar tu tierra porque no tienes otra opción.

¿Cree que Chile ha olvidado esa experiencia histórica de exilio?

En parte, sí. Chile tuvo miles de personas que debieron refugiarse en otros países. Muchas familias tienen algún pariente que vivió el exilio o que fue recibido en otra nación. Sin embargo, cuando hoy llegan personas que viven procesos similares de desarraigo, muchas veces se les mira con sospecha o rechazo.

La memoria debería servir para generar empatía, pero también para construir instituciones más preparadas. Si Chile necesitó alguna vez protección

internacional, debería entender la importancia de defenderla.

No se trata de abrir las fronteras sin ningún tipo de regulación. Se trata de reconocer que hay situaciones humanitarias que requieren respuestas humanitarias. Y para eso se necesitan protocolos, visados, instituciones y voluntad política.

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la forma en que la sociedad mira la migración?

Tienen una responsabilidad muy grande. Los medios pueden contribuir a informar con profundidad o pueden reforzar estigmas. Cuando se asocia constantemente migración con delincuencia, sin contexto, sin datos y sin distinguir situaciones, se instala una idea muy dañina.

El lenguaje importa. Las imágenes importan. Las fuentes que se eligen importan. Los medios tienen la capacidad de proyectar miradas, de construir sentido común y de definir quién aparece como amenaza y quién aparece como víctima.

Por eso es tan relevante que existan espacios para hablar de desplazamiento humano forzado, de infancia, de campamentos, de protección internacional y de ciencia social. La discusión pública necesita más profundidad y menos consignas.

Usted ha señalado que tanto la izquierda como la derecha han utilizado el tema migratorio. ¿Cómo observa ese fenómeno?

Creo que el tema migratorio ha sido utilizado políticamente por distintos sectores. A veces se usa para ganar apoyo, para endurecer discursos o para evitar hablar de problemas estructurales más complejos.

La migración se convierte en una herramienta electoral, pero no se aborda seriamente como fenómeno social. Hablar de visado humanitario, de derechos humanos o de protección internacional puede ser poco popular, entonces muchos prefieren evitarlo.

Pero la responsabilidad política no consiste en decir solo lo que da votos. Consiste también en hacerse cargo de temas difíciles, aunque sean incómodos. La movilidad humana no va a desaparecer porque se aprueben discursos más duros. Al contrario, puede volverse más riesgosa si no se gestiona adecuadamente.

¿Qué le preocupa de la criminalización del ingreso irregular?

Me preocupa que se desconozca la realidad del desplazamiento forzado. Muchas personas no ingresan por pasos no habilitados porque quieren vulnerar la ley, sino porque no tienen otra posibilidad real de hacerlo de manera regular.

Cuando una persona huye en condiciones de

hiperprecariedad, muchas veces no cuenta con documentos, dinero, redes ni tiempo para cumplir con trámites formales. Si además no existen vías humanitarias de ingreso o regularización, se empuja a esas personas hacia rutas peligrosas.

Criminalizar sin ofrecer alternativas puede profundizar la vulnerabilidad y aumentar los riesgos. La pregunta no es solamente cómo sancionamos, sino cómo prevenimos que las personas terminen en manos de traficantes, redes de abuso o caminos que ponen en peligro su vida.

¿Qué debería hacer el Estado frente a asentamientos como La Mula o La Pampa II?

Primero, reconocer la realidad. No se puede intervenir lo que se niega. El Estado debe tener información clara, presencia territorial y capacidad de coordinación entre vivienda, salud, educación, seguridad, niñez y migración.

Segundo, establecer prioridades. Si hay niños y niñas viviendo sin acceso a agua, educación o salud, eso debe ser abordado con urgencia. La protección de la infancia no puede depender del estatus migratorio de sus padres.

Tercero, construir políticas con participación de las comunidades. Las personas que viven en campamentos no pueden ser tratadas solo como objeto de intervención. Tienen voz, memoria, organización y experiencia.

Desde una mirada cultural, ¿qué nos dice esta crisis sobre la identidad de Tarapacá?

Nos dice que Tarapacá sigue siendo una región de frontera, de tránsito, de mezcla y de encuentros. Pero también nos desafía a decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Una región fronteriza puede elegir vivir desde el miedo o puede construir una cultura de integración con reglas, dignidad y responsabilidad.

La identidad regional no es estática. Se construye todos los días. La historia de Iquique, de Alto Hospicio y del norte grande está marcada por procesos migratorios, por comunidades diversas, por trabajadores que llegaron de distintos lugares, por familias que echaron raíces en medio del desierto.

Hoy estamos viviendo una nueva etapa de esa historia. La pregunta es si vamos a responder con memoria y humanidad, o con olvido y exclusión.

¿Qué rol cumplen la educación y la formación crítica en este debate?

Cumplen un rol central. Si no desarrollamos pensamiento crítico, es muy fácil caer en discursos simplistas. La educación permite entender que los problemas sociales tienen causas múltiples y que las soluciones requieren análisis, no solo reacción.

También permite formar ciudadanía. Una sociedad

que comprende su historia, que conoce sus derechos y que valora la evidencia puede tomar mejores decisiones. Por eso me preocupa cuando se debilita la educación, la investigación o las becas de posgrado. El conocimiento no es un lujo; es una herramienta para enfrentar crisis.

En regiones como Tarapacá necesitamos más investigación local, más formación avanzada, más diálogo entre academia, comunidad y políticas públicas. Nadie conoce mejor el territorio que quienes lo habitan y lo estudian desde aquí.

¿Cómo se puede conversar este tema con personas que tienen miedo o rechazo frente a la migración?

Primero, sin tratarlas como enemigas. El miedo muchas veces nace de experiencias reales de inseguridad, de precariedad o de abandono. No se puede negar lo que la gente siente. Pero sí se puede abrir una conversación para distinguir causas, responsabilidades y soluciones.

Yo no creo que el problema sea la maldad. Creo que muchas veces es la ignorancia, entendida como falta de información o falta de espacios para mirar el problema completo. Mi interés es bajar el conocimiento, conversar con personas de distintas posiciones políticas y explicar por qué un enfoque humanitario también puede ser un enfoque de seguridad y de futuro.

Necesitamos menos trincheras y más conversación informada. La migración, la pobreza y la seguridad son temas demasiado importantes como para dejarlos solo en manos de consignas.

Si tuviera que resumir el mensaje central de su investigación, ¿cuál sería?

Que el enemigo no es la migración. El enemigo es la pobreza, la exclusión, la falta de derechos, la ausencia de políticas públicas y la indiferencia frente a la vulnerabilidad.

Cuando una sociedad permite que niños y niñas crezcan sin agua, sin salud, sin educación adecuada y bajo amenaza permanente, no solo está fallando con esas familias. Está comprometiendo su propio futuro.

También diría que debemos ser previsores. Hoy hablamos de personas venezolanas, colombianas, cubanas o de otras nacionalidades, pero mañana podríamos ser nosotros quienes necesitemos protección. Por eso defender la dignidad humana no es un favor que se le hace a otro; es construir una sociedad más segura y más justa para todos.

¿Qué espera aportar desde su trabajo académico y territorial en los próximos años?

Espero aportar conocimiento, memoria y herramientas para la toma de decisiones. Me interesa que las historias de las personas desplazadas no queden invisibilizadas. Me interesa que se

comprenda la complejidad del fenómeno y que se puedan diseñar políticas públicas más humanas, más inteligentes y más eficaces.

También espero contribuir a que en Chile se hable seriamente de un visado humanitario y de mecanismos de protección para situaciones de desplazamiento forzado. No podemos seguir improvisando frente a crisis que ya existen y que probablemente se intensificarán.

Mi propósito es que el conocimiento no se quede encerrado en la academia, sino que pueda dialogar con las comunidades, con los medios, con las autoridades y con la ciudadanía. Porque si algo nos enseña la frontera es que todas las vidas están conectadas.

Finalmente, ¿por qué este tema debería importarle a quienes sienten que viven lejos de esa realidad?

Porque nadie vive aislado de los problemas sociales. Lo que ocurre en los campamentos, en la frontera o en los márgenes de la ciudad termina impactando a toda la región. La inseguridad, la pobreza, la falta de acceso a derechos y la exclusión no se quedan encerradas en un territorio.

Además, porque estamos hablando de personas. De niños, de madres, de familias, de trabajadores, de historias de vida. Podemos discutir políticas migratorias, controles y normas, pero no deberíamos perder la humanidad en esa discusión.

Tarapacá tiene una historia profunda de movilidad, de frontera y de diversidad. Si recuperamos esa memoria, quizás podamos enfrentar el presente con más inteligencia y menos miedo.

La conversación con Victoria Cardemil permite mirar la frontera norte desde un ángulo distinto al habitual. No desde la urgencia policial ni desde el conflicto político inmediato, sino desde la memoria, la ciencia social y la pregunta cultural por el tipo de comunidad que Tarapacá quiere construir.

Su reflexión incomoda porque obliga a revisar certezas. Plantea que la migración no puede ser reducida a una amenaza, que los campamentos no son solo un problema habitacional, que la infancia vulnerable no puede esperar y que la seguridad requiere mucho más que control. También recuerda que Chile, y particularmente el norte, ha sido históricamente un territorio de desplazamientos, encuentros y arraigos múltiples.

En tiempos en que la frontera se ha convertido en tema de disputa nacional, voces como la de Cardemil invitan a recuperar profundidad. Su mirada niega las dificultades, pero exige abordadas con evidencia, humanidad y sentido de futuro. Porque en el fondo, como sostiene la investigadora, una sociedad que abandona a quienes viven en sus márgenes termina debilitando también su propio centro.